

contra la sentencia pronunciada por el C. Jefe Político de Silacayoapan, que lo condenó á muerte por los delitos de asalto, plagio, robo é incendio: y que la causa debe remitirse á la autoridad competente, para juzgar á Reyes.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*E. Montes.*—*Simón Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

- Es copia que certifico. México, Julio 30 de 1875.—*Enrique Landa*, Oficial Mayor.

AUTOS

Promovidos por la Hacienda Pública contra el C. Juan Aldaiturriaga, relativos á un saldo de siete mil doscientos pesos procedentes de una operacion sobre bienes nacionalizados.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

Habiendo redimido el C. Juan Aldaiturriaga en 1869, varios capitales eclesiásticos por valor de ocho mil pesos, sin que esta operacion hubiera tenido su verificativo por no existir los capitales designados, le fué sustituida aquella cantidad oportunamente, con el capital de cinco mil doscientos cincuenta y un pesos impuestos sobre la casanúm. 13, sita en la plaza principal de

Pátzcuaro perteneciente á la testamentaria de D. Matías Tejada, y con el de dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos que á varias corporaciones reconocia la hacienda de Ayumba, resultando en contra del C. Aldaiturriaga, un adeudo en bonos de siete mil doscientos pesos.

La Jefatura de Hacienda obrando con total sujecion al Supremo decreto de 13 de Julio de 1869, formó el expediente respectivo de redencion, asegurando para la Hacienda pública federal, la parte que en bonos debia entregar el responsable á consecuencia de la operacion practicada á su favor. Como este adeudo no ha sido satisfecho á los plazos vencidos, sin embargo de que el deudor ha obtenido para el efecto varias prórogas del Ministerio de Hacienda, ha sido preciso exigir el cobro judicialmente, para lo cual este Ministerio puso demanda en forma en 5 de Enero próximo pasado, siguiéndose este juicio en rebeldía por no haber querido presentarse la parte demandada.

Como esta no rindió prueba alguna, debe sin duda resolverse la presente cuestion á favor de la Hacienda federal, considerando las pruebas que obran en el expediente auténtico formado por la Jefatura de Hacienda en virtud de las facultades del citado decreto de 13 de Julio de 1869. Registrando cada uno de estos antecedentes, se vé á cada paso consignada de la manera mas expresa la confusion del responsable, y para quitar absolutamente toda duda se registra á la foja 32 la manifestacion mas franca y espontánea por la parte de Aldaiturriaga acerca de la cesion que hace á favor de la Jefatura de Hacienda, de la casa sita en Pátzcuaro para cubrir en parte el adeudo. Sin negar esto y tan solo por libertarse del embargo, pretendió últimamente hacer valer que la escritura de imposicion estaba cancelada, sin duda para deducir de aquí que no debian tener valor alguno los pagarés otorgados á la oficina. Pero esta escepcion sobre no tener valor al-

guno legal por no haberse opuesto en tela de juicio, queda desvirtuada con el precepto terminante del artículo 13 del Supremo decreto citado, con el cual no se ha cumplido en ninguna de sus partes.

Como el C. Aldaiturriaga no satisfizo el adeudo reclamado por la oficina de Hacienda, que lo este convertido en numerario conforme á la circular de 9 de Marzo de 1872, en cuya inteligencia hizo el deudor la cesion de que ántes se ha hablado.

En atencion á estas pruebas que por su naturaleza son auténticas, y que obran en el expediente formado por la Jefatura de Hacienda, y el cual se acompañó por este Ministerio á su escrito de demanda, de conformidad con las prescripciones legales, pide se condene al C. Juan Aldaiturriaga al pago de la cantidad demandada y al de las costas á que hubiere lugar, remitiéndose oportunamente á la Jefatura de Hacienda, el expediente respectivo para que proceda con arreglo á sus facultades.

Morelia, Junio 17 de 1874.—*N. Caballero.*

Es copia que certifico. Morelia, Julio 6 de 1874.—*Isidro Aleman.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Morelia, Julio 2 de 1874.

Vistos. En 5 de Enero de este año el Ministerio fiscal puso demanda contra el C. Juan Aldaiturriaga, por la cantidad de mil doscientos pesos que este adeuda en bonos á la Jefatura de Hacienda del Estado, por operaciones de redencion de bienes nacionalizados que verificó el año de 1859, conforme á la ley de 13 de Julio del mismo, apoyando su accion en los diferentes documentos que obran en el expediente formado por aquella Oficina para el cobro del adeudo. Corrido traslado á Aldaiturriaga en vía sumaria de dicha demanda no se presentó á contestarla á pesar de las diversas

citaciones que al efecto se hicieron: y declarando rebelde, á petición del C. Promotor, en 6 de Abril último se siguió el juicio por todos sus trámites ante los estrados de este Juzgado, hasta citacion para sentencia que se hizo en 20 del mes próximo pasado y en la forma provenida por derecho: y

Resultando de las constancias presentadas por parte de la Hacienda pública y particularmente de la confesion extrajudicial del demandado visible á fojas 32 frente, plenamente probada la accion deducida contra el C. Juan Aldaiturriaga: y

Considerando: que esta reconoce dos fuentes; primera, el capital de cinco mil doscientos cincuenta y un pesos que al clero reconocía la casa núm. 13 situada en la plaza principal de la Ciudad de Pátzcuaro, que le fué adjudicada por la Jefatura de Hacienda en 1859, y conforme á la ley de 13 de Julio del mismo año; segunda, el capital de dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos que á varias Corporaciones eclesiásticas reconocía la hacienda de Ayumba en el Distrito de los Reyes; que igualmente y por la misma causa le fué adjudicada al expresado Aldaiturriaga, quien practicó las operaciones de redencion, quedando á deber sin haber pagado hasta la fecha; la parte que en bonos señaló la ley citada, á pesar de los varios plazos que para hacer el pago le concedió el Ministerio de Hacienda y de las diversas gestiones que para lo mismo hizo la Jefatura del Estado.

Considerando: que además de estar probado el adeudo por los documentos en que se apoyó aquella Oficina, lo está igualmente por la confesion extrajudicial del demandado que, conforme á las leyes 2 y 7, título 13 partida 3ª y artículo 549 del Código de procedimientos, basta para resolver en favor del actor: y que en virtud de lo prevenido en la Suprema Circular de 29 de Marzo de 1872, el pago debe hacerse, no ya en bonos, sino en numerario, por haber dejado el deudor pasar, no solo los plazos le-

gales sino aún los extraordinarios que se le concedieron.

Considerando en fin: que para asegurar el adeudo, procedió la Jefatura de Hacienda á asegurar la finca de que se ha hablado al principio, afecta á una parte del crédito por escritura de hipoteca otorgada en esta Ciudad en 12 de Enero de 1842: y que notificado Aldaituriaga de pago en 28 de Agosto de 1873, contestó, que siéndole imposible hacerlo en virtud de sus circunstancias, hacia formal cesion del capital de cinco mil doscientos cincuenta y un pesos impuesto sobre aquella finca y adquirido por él en virtud de la adjudicacion que de él hizo, y por no tener otros bienes con que responder.

Por todo lo expuesto, en virtud de las disposiciones legales citadas y con fundamento del artículo 846 del Código de procedimientos, como pide el C. Promotor, se declara:

1º Que el C. Juan Aldaituriaga es deudor al Erario federal de la cantidad de siete mil doscientos pesos.

2º Que se admite la cesion que para pago de esta cantidad hizo del capital de cinco mil doscientos cincuenta y un pesos que le reconoce la casa número 13 de la plaza principal de Pátzcuaro, que pertenecía á la testamentaria de D. Matías Tejeda, dejando á salvo los derechos de la Hacienda pública, para que repita contra el demandado por el deficiente, cuando lo estime oportuno y conveniente.

3º Remítase á la Jefatura de Hacienda, con copia de este fallo, el expediente que remitió el 22 de Mayo de 1873, para que en uso de sus facultades proceda á rematar la finca secuestrada y á aplicar el precio de su venta al adeudo referido. Hágase saber y remítase copia al «Semanario Judicial.» Definitivamente juzgando, lo decretó el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacan. Doy fe.—*Gabino Ortiz*.—Una rúbrica.—Ante mí.—*Isidro Aleman*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Julio 6 de 1874.—*Isidro Aleman*, secretario.

*Pedimento del C. Promotor Fiscal
del Tribunal de Circuito,*

C. Magistrado de Circuito:

El Promotor fiscal dice: que declarado en primera instancia deudor de la Hacienda Pública D. Juan Aldaituriaga, por la suma de siete mil doscientos pesos, se le abonan los cinco mil doscientos cincuenta y un pesos, valor de una casa que devuelve al fisco.

Conforme el que suscribe con el adeudo, no lo está con la devolución, y adhiriéndose á la aplicacion de la contraria, pide la revocacion de la sentencia en la parte que manda abonar los cinco mil doscientos cincuenta pesos al Sr. Aldaituriaga.

En las leyes antiguas de los romanos fué desconocido este remedio de adherirse á la apelacion; los que se consideraban agravados por la sentencia de los jueces, apelaban de ella para que el superior la enmendase; y si no lo hacian ó no seguian la apelacion en los términos señalados, se entendia que aprobaban y consentian las sentencias. Justiniano enmendó esta antigua legislacion, permitiendo á la parte que no apeló, que á consecuencia de la apelacion contraria pueda pedir en tribunal superior, que se reforme la sentencia del inferior en lo que la considere gravosa y perjudicial. Así se vé del contesto de la ley 39. *Código de appellationibus*.

No hay ley alguna española que autorice ni renueve estas disposiciones; pero la práctica antigua la ha adoptado, como es de verse en Salgado de REGIA PROTECTOR, part. 3ª, cap. 16 núm. 65: Acevedo, á la ley 1ª, tit. 18, libro 4º núm. 62; y Cañada, Juicios Civiles, partida 2ª, cap. 6 y 7.

Procede el adeudo de Aldaituriaga, del capital de cinco mil doscientos cincuenta y un pesos, que se adjudicó, y que se reco-

nocia al Clero en la casa núm. 13, situada en la plaza principal de la ciudad de Pátzcuaro; y del de dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos que tambien se adjudicó, y que á varias corporaciones eclesiásticas reconocia la Hacienda de Ayumba. Las operaciones fueron practicadas con arreglo á las prescripciones de la ley de 13 de Julio de 1859, quedando á deber Aldaiturriaga los siete mil doscientos pesos referidos, en bonos de la deuda nacional consolidada.

El contrato debe considerarse como de compra de acciones del fisco, con las condiciones establecidas en la ley de 13 de Julio de 1859, que dispuso la enagenacion de los bienes eclesiásticos, por cuenta de la Nacion. No habiéndose enterado la parte en bonos, débese ahora en dinero, conforme á la Suprema Circular de 29 de Marzo de 1872.

Esta circular no tiene efecto retroactivo, supuesto que la Nacion podia hacer lo que quisiese con los bienes no desamortizados, y no los son los que los poseen, sin haber pagado el precio de la adquisicion. En suma, no lastima derechos adquiridos, porque ningunos tienen los que no han cumplido sus contratos.

Esto supuesto, no debió de admitir el C. Juez la cesion del crédito fincado en la casa de Pátzcuaro; porque no está al arbitrio de una de las partes contratantes rescindir el convenio sin consentimiento de la otra; pero este consentimiento solo podria haberse dado por la autoridad administrativa suprema, que en el caso lo es el Ministerio de Hacienda. Así es que la sentencia en este caso debió poner por conclusion la aprobacion del Ministro para que se rescindiese el contrato, ó mejor dicho, segun su consentimiento.

Para que se comprenda el error en que ha incurrido el C. Juez en este particular, basta recordar que las obligaciones, cuando no se cumplen por una parte, solo se disuelven por comun acuerdo de ambas, y del mismo modo que se contrajeron. *Nihil tam-*

naturale est, quia meo genere quilibet dissolvere quo colligatum est: ideo verborum obligatio verbis tollitur: nudo consensus obligatio contrario consensu dissolvitur. (S. 35 de reg. juris.) En efecto, nada es mas natural que el que cada cosa se disuelva del modo que se hizo, y así: la obligacion verbal se disuelve con palabras: la consensual, por el disenso en contrario. La compra-venta es contrato consensual, supuesto que queda perfeccionada tan luego como las partes han convenido en la respectiva obligacion que quieren contraer. *Emptia et venditio contrahitur simulatque de pretio conveniunt.*

Un contrato no puede ser anulado por la simple declaracion de la voluntad de una de las partes, ó sea por el abandono ó renuncia de sus derechos. En materia de obligacion, el deudor jamás podrá por sí solo tener la facultad de romperla.

Para anular los efectos de un contrato como el de compra-venta, siempre se necesitará el mutuo consentimiento. Estas hijas consideraciones fundadas en el espíritu de las leyes del tit. 5º partida 5ª, debiera haber apartado al C. Juez del Distrito de Morelia de juzgar disuelto el contrato, por la devolucion de las acciones compradas por Aldaiturriaga.

Quedan contra este en pie, las acciones del fisco, para exigirle los siete mil doscientos pesos que aun adeuda.

No es fuera del caso fijar la naturaleza de aquellas.

La accion *venditi ó exvenditi*, compete al vendedor, entregada ya la cosa, contra el comprador y un heredero para que le paguen al precio convenido. Y así es que teniendo esta accion el fisco contra Aldaiturriaga, no pudo el C. Juez considerarla innovada por el abandono que del capital hiciera el comprador.

Compételo igualmente la accion rescisoria, por la falta del precio estipulado; y si de esta accion no hizo uso el fisco pidiendo la

devolucion de la cosa, mal pudiera obligarlo la oficiosidad del C. Juez.

La complicacion de la jurisprudencia romana en lo relativo á las acciones, se ha sustituido en la nuestra, por el sencillísimo principio: de que todo pacto conforme á derecho, produce obligacion, siempre que conste la voluntad de obligarse. La simple y sencilla exaccion de lo pactado, es el límite de la jurisdiccion del Juez. «Pareciendo» dice la ley, que alguno se quizo obligar á otro..... sea tenudo de cumplir aquello á que obligó.» [L. 1, tít. 1, lib. 10 de la N. R.]

Como Aldaiturriaga se obligase á entregar bonos, parece que á otra cosa no se halla obligado. Este punto merece alguna detencion, para demostrar que debe entregar dinero en vez de créditos; y con tanto mas cuidado hay que examinarlo, cuanto que el demandado no ha de oírse en esta instancia por seguirse en su ausencia y rebeldía.

Desde luego se ocha de ver, que no habiéndose cumplido las condiciones del contrato, quedaba íntegro el derecho del gobierno, para resolver en la vía administrativa lo que tuviere por conveniente. La ley de 18 de Julio de 1859, no señaló pena alguna á los que no entregasen los bonos, y por consiguiente los contratos en esta parte quedaron sujetos á las reglas del derecho comun. En las obligaciones de hacer ó de entregar cosa determinada, se condena al que no lo verifica al pago de lo que importa la cosa adeudada; y siendo bonos los que debieron exhibirse, no habiéndolo hecho Aldaiturriaga, debe condenarse á entregar su importe ó valor íntegro.

El art. 37 de la ley de 18 de Febrero de 1861, determinó, que se hiciera uso de la facultad económico coactiva, para exigir los bonos, despues de sufrir un cincuenta por ciento de recargo los deudores morosos. Como esto no se hiciera, quedaron al gobierno íntegros sus derechos para disponer lo conveniente, como lo hizo en la circular de 29 de

Marzo de 1872, para que con arreglo á las prescripciones del derecho, entregasen dinero los que no habian dado los bonos.

No hay en esto lesion de derechos adquiridos, pues ningunos posee, quien no ha cumplido con las condiciones de la concesion legal que le hiciera.

Los bienes nacionales se enagenaron bajo el dominio de la ley á condicion de que se pagara su precio en los términos establecidos de antemano. Las condiciones tienen por carácter general y esencial, hacer depender la relacion de derecho, de un suceso futuro. Una vez cumplida la condicion, esa relacion de derecho existe, y sus efectos ya no son dudosos, y no se diga que al dictar resoluciones generales sobre estos puntos, el gobierno se constituye juez y parte, sino que únicamente obra dentro del círculo de su plena administracion; manifiesta su voluntad, tocando á los tribunales resolver las cuestiones que se suscitan entre él y la persona interesada.

La prescripcion alegada, no puede tomarse á lo serio cuando han faltado la buena fé, justo título; y el término legal relativo á las acciones no ha trascurrido (L. 9, tít. 29 partida 3ª); en vista de lo manifestado, no podrá dudarse que las convenciones legítimas son ley para los contrayentes, quienes no pueden revocarlas sino de comun acuerdo ó por causas marcadas en el derecho, debiendo cumplir de buena fé, no solo lo expresado en su tenor literal, sino cuanto dictan la equidad, la ley y la costumbre, segun su diversa naturaleza.

La cancelacion de que se hace mérito, esa notacion de la subrogacion de Aldaiturriaga en lugar del erario; y no importa la extincion de la deuda contraida por aquel, sino antes bien es prueba de la operacion cuyo precio se le reclama.

Por lo espuesto el Promotor fiscal pide: Que revocándose las cláusulas 2ª y 3ª de la sentencia del inferior, se confirme la 1ª, mandándose sacar á remate los bienes secuestrados, hasta que la Hacienda se ha-

ga íntegro pago de los siete mil doscientos pesos que le adeuda D. Juan Aldaiturriaga.

Querétaro, Octubre 28 de 1874.—*Luis Castañeda*—Otro sí el promotor fiscal pide: se sigan entendiendo las notificaciones con los estrados del tribunal, en ausencia y rebeldía de D. Juan Aldaiturriaga; señalando ese día para la vista, de modo que este pueda concurrir á ella, notificándole por exhorto á oficio exhortatorio esta providencia, así como la citación para sentencia en su caso, por equidad, si así pareciere al tribunal.—Fecha ut supra.—*Castañeda*.

Sentencia del Tribunal de Circuito.

«Querétaro Diciembre cuatro de mil ochocientos setenta y cuatro.—Vistos: el C. Antonio Rodríguez Gil se obligó el veintitres de Agosto de mil ochocientos cincuenta y nueve, á satisfacer á la Jefatura de Hacienda de Michoacan al año de su fecha, la cantidad de siete mil doscientos pesos en bonos de la deuda interior consolidada ó en créditos prevenidos por el decreto fecha once de Enero de mil ochocientos cincuenta y seis, correspondiente al noventa por ciento del capital de ocho mil pesos que redimió á nombre del C. Juan N. Aldaiturriaga, cuyo capital reconocia la Hacienda de Tufacate á varias corporaciones eclesiásticas; mas como no tuviese efecto esa redencion por haberse aplicado con anterioridad aquel capital, se le sustituyó con el de cinco mil doscientos cincuenta y un pesos que el Juzgado de testamentos reconocia en la casa número trece situada en Pátzcuaro, cuartel dos, manzana primera, calle "Zaragoza," y con el dos mil setecientos noventa y nueve pesos que reconoció la Hacienda de Ayumba á varias corporaciones religiosas, cuya redencion tuvo lugar el cuatro de Octubre y treinta de Noviembre de mil ochocientos sesenta, segun se refiere en el oficio de fs. 13 fte.; y como no se hubiera hecho pago de un capital á la Hacienda Pública que legítimamente le correspondia, á

pesar de las gestiones de la Jefatura de Hacienda de Michoacan de Ocampo, se avisó al C. Juez de Distrito de ese Estado en el conocimiento de ese negocio el veintidos de Mayo del año último y en vista de lo actuado y de lo alegado en esta instancia, es de considerarse y se considera:

Que la obligacion contraida por el denunciante de los capitales, quedó perfeccionada y surtió sus efectos para poder exigir el pago del capital luego que se cumplió el plazo y en los términos prefijados en el contrato, segun lo prevenido en la ley 6ª lib. 5ª part. 5ª, mediante haberse adquirido los derechos que otorga el art. 15 de la ley de 13 de Junio de 1859, contando con la renuncia de los antiguos censatarios á los que prefiere el art. 11 y 5ª de la ley últimamente citada.

Que perfeccionado el contrato entre el vendedor y el comprador de los capitales, estuvo y está este obligado al pago valor de aquellos y á salvar la fianza que debe haber otorgado segun lo prevenido en el art. 16 y 19 de la ley de 13 de Junio citada, con la particularidad de hacer ahora en efectivo el pago por la moratoria contraida, lo que establece la ley de 29 de 1872, que no puede argüirse de retroactiva en razon de hallarse el capital denunciado con los privilegios propios y en la categoría de nacionalizado con la hipoteca que designa el art. 13 de la ley de Julio referida, mediante no haberse hecho en tiempo, pago del capital, en los términos fijados en el art. 10 de la ley precitada.

Que contando con lo espuesto y estrechado á hacer el pago el C. Aldaiturriaga por la Jefatura de Hacienda de Michoacan, en uso de la facultad concedida por la ley de 20 de Enero de 1837, 20 de Noviembre de 838 y 11 de Diciembre de 1871, tuvo que confesar el deudor la deuda, lo que produjo la prueba que marca la ley 2ª tit. 13 partida 3ª, alegando hallarse en imposibilidad de pagar, segun lo espuesto á fojas 21, 22 y 27 fte., por lo que hizo ce-

sion de la casa en que se hallaba impuesto el capital de cinco mil doscientos cincuenta y un pesos, segun es de verse á fojas 32 fte., cuya cesion no aceptaba, y aparecer por otra parte su revocacion, fojas 36 fte., no pudo producir efecto puesto que era de necesidad el consentimiento recíproco para que se perfeccionase la cesion expresada.

Que como se ha dicho, terminado el contrato concerniente á la redencion de los capitales impuestos en la casa situada en Pátzcuaro, en la hacienda de Ayumba en el Distrito de los Reyes, se está en el caso de recobrar esos capitales de las fincas afectas, sin que obste haya disminuido el valor de la casa hipotecada al erario, segun lo dispuesto en el art. 13 de la ley de 13 de Julio de 1859, por ser menor el valúo de ella, en vista de lo que establece la ley 33, tit. 5º partida 5ª, sin que deban aplicarse las penas señaladas en los arts. 26 y 37 de la ley de 5 de Febrero de 1861, en razon de ser posterior á la celebracion del contrato.

Por lo espuesto, mediante los fundamentos expresados, art. 82 de la ley 4 Marzo de 1857 y de conformidad con lo pedido por C. Promotor fiscal, fallo.

1ª Es deudor el C. Juan N. Aldaiturriaga á la Hacienda pública federal, de la cantidad de siete mil doscientos pesos.

2ª Se condena al citado deudor á pagar la cantidad expresada y los réditos que ha devengado ese capital, á razon del seis por ciento anual, desde la fecha en que se debió hacer el pago de las cantidades que redimió, exigiéndose del fiador en su caso, el completo del capital.

3ª No se expresa condena de costas.

Y quedando revocada en lo conducente la sentencia que pronunció el C. Juez de Distrito de Morelia á dos de Julio del presente año, notifíquese y ejecútase si hubiere conformidad, librando la Secretaría los recaudos que corresponde para que saque á remate los bienes secuestrados hasta que la Hacienda pública se haga pago íntegro de la cantidad que legítimamente le corres-

ponde y de que se hace mérito en la segunda proposicion, sin obligar la responsabilidad afecta en la hacienda de Ayumba en caso de que no se haya hecho pago de los capitales que reconocia, y se encarga al C. Juez enunciado fije su atencion en que el Código de procedimientos que cita en apoyo de sus providencias está vigente en el Distrito Federal y territorio de la Baja California y no en los demás Tribunales Federales.

El C. Magistrado de Circuito, lo decretó y firmó. Doy fé.—*Aurelio Ramis Portugal.*—*Ramon Reynoso.*

Lo inserto á vd. para que se sirva mandarlo hacer saber al C. Juan Aldaiturriaga, y con su respuesta me devuelva el presente para dar cuenta.

Independencia y libertad, Querétaro, Diciembre 14 de 1874.—*Ramon Reynoso*, secretario.

Pedimento del C. Procurador General de la Nación.

El Procurador General interino dice: que en estos autos, por demanda del Ministerio público y previa la sustanciacion correspondiente, el Juzgado de Distrito de Michoacan, pronunció sentencia contra D. Juan Aldaiturriaga en la que hizo las declaraciones siguientes.

Primera: Que el C. Aldaiturriaga es deudor al Erario federal de la cantidad de siete mil doscientos pesos.

“Segunda: Que se admite la cesion que para pago de esta cantidad hizo del capital de cinco mil doscientos cincuenta y un pesos, que le reconoce la casa núm. 13 de la Plaza principal de Pátzcuaro, que perteneció á la testamentaria de D. Matías Tajeda, dejando á salvo los derechos de la Hacienda Pública para que repita contra el demandado por el deficiente, cuando lo estime oportuno y conveniente.”

Tercera: Remítase á la Jefatura de Hacienda, con copia de este fallo, el expediente que remitió el 22 de Mayo de 1873, para que en uso de sus facultades proceda á rematar la finca secuestrada, y aplicar el precio de su venta al adeudo referido.

"En virtud de apelacion interpuesta por el demandado, el Tribunal de Circuito de Querétaro, revisando la anterior sentencia, la reformó en estos términos."

Primero. Es deudor el C. Aldaiturriaga á la Hacienda Pública federal, de la cantidad de siete mil doscientos pesos.

"Segunda. Se condena al citado deudor á pagar la cantidad expresada y los réditos que ha devengado ese capital, á razon de seis por ciento anual, desde la fecha en que debió hacer el pago de las cantidades que redimió, exigiéndose del fiador en su caso, el completo del capital."

"Tercero. No se hace condena de costas."

Tampoco con este fallo se conformó el C. Aldaiturriaga, y suplicó de él, admitiéndosele el recurso por auto de 6 de Enero último, el que se mandó notificar, y en efecto se notificó al suplicante por el Juzgado de Distrito de Morelia en 15 de dicho mes. Hasta hoy no consta, al menos en las actuaciones que el suscrito tiene á la vista, que el C. Aldaiturriaga se haya presentado á continuar la súplica ante esta Superioridad, y aunque podia decirse que para ese fin no se le designó término alguno por el Tribunal de Circuito, como debió haberse hecho, sin embargo, es necesario tener presente que la ley 3ª, tít. 20, lib. 11, de la Nov. Recop., prevée el caso y dispone lo que ha de observarse cuando por inadvertencia ó olvido del inferior, no se ha fijado tiempo al que interpone el recurso de alzada, para continuarlo ó mejorarlo, como se dice comunmente, ante el Superior. "Y si el Juzgado no le pusiere plazo en que se presente, mandamos, ordena la ley citada, que sea tenido el que se alzó, de la seguir, la alzada y se presentare ante

TOMO VII—PARTE II.

el Rey, hoy ante el Tribunal á quien corresponda, hasta cuarenta dias, si fuere allende los puertos y si fuere aquende hasta quince dias.....y si en este tiempo no lo quisiere seguir el recurso.....finque firme el juicio de que se alzan en estos plazos que dichos son....."

La conveniencia de fijar el término de que se viene hablando, respetada por las leyes anteriores á la de la Nov. Recop., como puede verse en las 23 y 26, tít. 23 Part. 3ª y 4ª tít. 3 del Ordenamiento de Alcalá, lo mismo que por las modernas, es cosa puesta al abrigo de toda duda. Ella reconoce principalmente como base esencial, el evitar que los pleitos se prolonguen indefinidamente por falta de comparecencia de los interesados, y se funda además en una presuncion juris, evidentemente justa y racional, que descansa como todas las de su especie, en hechos ciertos, de los que se hace nacer la voluntad presunta de las partes, mientras no se rindan pruebas en contrario. Así, cuando un apelante ó suplicante deja pasar cierto tiempo sin presentarse á continuar la apelacion ó la súplica, y cuando ese tiempo es el que por la distancia de los lugares, se ha considerado bastante para hacer la presentacion, la ley presume, y con ella el sentido comun, que no es de su voluntad el que el recurso llegue á su término; y por lo mismo, como sin esa voluntad es materialmente imposible sustanciar el procedimiento, la misma ley ha dispuesto que se ponga punto á éste, dándose por firme y valedero lo que en primera y segunda instancia se hubiere hecho, á no ser que se aleguen y prueben causas justas que demuestren impedimentos insuperables por parte de los que deben cumplirla.

Y no se diga que los términos de que habla la ley recopilada antes trascrita, son cortos, y que por este motivo no hay obligacion de observarlos fielmente, porque establecidos ellos en tiempos en que las distancias eran en algunas ocasiones difíciles

y aun imposibles de salvar por la falta de comunicaciones, hoy son mas que suficientes á causa de haber cesado esta falta, y de no lucharse para caminar con las dificultades con qué entonces se tropezaba. ¿Quién podrá negar, por ejemplo, que quince días que la ley señala, y cuarenta y cuatro, que sin contar los referidos, ha dejado pasar el C. Aldaiturriaga desde que se le hizo la notificación de haberse admitido la súplica que interpuso, son sobrados y mucho, para que si hubiera querido, se hubiera presentado ya ante esta Superioridad á mejorarla? Y, ¿quién no verá en este hecho un dato bastante para deducir de él que el mismo Aldaiturriaga no tiene voluntad de continuar el recurso, sino al contrario, de que se tenga como ejecutoria la sentencia de segunda instancia, respecto de la que le hizo valer? El ánimo mas vulgar se inclina á ello; y recordando por otra parte las disposiciones legales que son terminantes sobre el particular, y que quedan citadas, tiene que resolverse así, en obediencia de ellas y de la razón que tambien lo ordena.

Por lo expuesto, el Procurador General pide á la Sala se sirva declarar desierto el recurso de súplica interpuesta por el C. Juan Aldaiturriaga contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Circuito de Querétaro en el juicio que con el mismo C. siguió ante el Juzgado de Distrito de Michoacan, la Hacienda Pública representada por el Promotor fiscal de este Juzgado, por haber trascurrido con exceso el término en que ha debido ser mejorado el espresado recurso, y que dicha sentencia ha causado ejecutoria, mandando se remitan al Tribunal de su procedencia los autos relativos para los fines que haya lugar.

México, Marzo 11 de 1875.—Lozano.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 15 de 1875.

Vistos los autos promovidos por la Hacienda Pública contra el C. Juan Aldaiturriaga, por saldo de la cantidad de siete mil doscientos pesos procedentes de una operacion sobre bienes nacionalizados; y de cuyas constancias aparece, que el referido Aldaiturriaga por sentencia pronunciada en 2ª instancia por el Tribunal de Circuito de Querétaro en 4 de Diciembre de 1874, se le declaró deudor al Erario Nacional de la mencionada cantidad, y ademas fué condenado á pagar los réditos legales causados desde la fecha en que debió haber satisfecho los valores que redimió, exigiéndose del fiador, en su caso, el completo del capital, de cuyo fallo suplicó el demandado:

Considerando: que el suplicante no se ha presentado ante esta Corte á mejorar el recurso, no obstante el requerimiento que por equidad le mandó hacer esta 1ª Sala en 18 de Marzo último, que con arreglo á la ley 3ª tit. 20 Lib. 11 de la Nov. Recop., el que interpone un recurso como el de que se trata, tiene la obligacion de mejorarlo dentro del término que le señala el Tribunal á quo, y si ninguno le señaló, como sucede en el presente caso, entonces debe mejorarlo dentro del que determina la expresada ley. Por lo espuesto y de conformidad con lo pedido por el C. Procurador General, se declara:

Primero: es de darse y se dá por desierto el recurso de súplica, interpuesto por el C. Juan Aldaiturriaga, contra la sentencia de 2ª instancia pronunciada por el Tribunal de Circuito de Querétaro, en este negocio.

Segundo: la espresada sentencia ha causado ejecutoria y deba producir los efectos respectivos.

Tercero: Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito de que proceden, con copia certificada de este fallo para los efec-

tos consiguientes. Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema d. Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Julio 30 de 1875.—*Enrique Landa.*

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Guanajuato, contra María Isabel Quiróz y Quirino Alcocer, por circulacion de moneda falsa.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito

El Promotor Fiscal dice: En la mañana del día 5 de Octubre del año próximo pasado, María Isabel Quiróz ocurrió á la tienda llamada la Brisa y pidió unos cigarros al dependiente ciudadano Quirino Alcocer á quien pagó con una moneda del valor de un peso. El ciudadano Quirino Alcocer devolvió dicha moneda diciendo que era falsa; pero sosteniendo Isabel Quiróz que la moneda que ella habia dado era buena y que el dependiente Alcocer la habia cambiado por otra falsa, dió parte á un agente de policía, quien recogió la moneda que obra en la causa y consignó al Juzgado de Distrito á María Isabel Quiróz. La causa se siguió tambien contra el ciudadano Quirino Alcocer; pero, concluido el sumario, se sobreseyó respecto de él por no haber resultado otra prueba de su culpabilidad que el testimonio de Isabel Quiróz, insuficiente para hacerle cargo del delito que motivó el proceso.

La moneda de que se ha hecho mencion; segun la calificación judicial y la calificación que de ella hicieron, los Ensayadores de la casa de moneda de esta ciudades falsa.

Isabel Quiróz en su declaracion preparatoria, en los careos y en su confesion con con cargos, ha sostenido que la moneda que hizo pago en la tienda de la Brisa era buena y que allí se la cambiaron por otra falsa.

En contra de este testimonio existen las declaraciones de los ciudadanos Quirino Alcocer, Ramon Arredondo y Esequiel Vargas, que es preciso examinar para resolver si está demostrada la culpabilidad de la Quiróz. El testimonio del ciudadano Alcocer como interesado en el resultado del proceso y acusado á su vez por Isabel Quiróz, no tiene la fuerza de un testigo mayor de toda excepcion. El ciudadano Arredondo, no vió la moneda que entregó la procesada, de manera que solamente de la declaracion del ciudadano Vargas puede deducirse, que la Quiróz dió una moneda falsa. Los tres testigos son dependientes de la misma casa de comercio; por lo que, no puede decirse, que sean completamente imparciales; por cuyo motivo, á juicio del que suscribe, no existe la prueba testimonial que exige la ley 32, título 11. Partida 3ª, para pronunciar un fallo condenatorio.

Además, debe tenerse presente que el artículo 74 del Código Penal establece, que para castigar al expendedor de moneda falsa, es necesario que resulte demostrado que obró á sabiendas.

En la presente causa aunque hubiera prueba plena respecto de que la Quiróz hubiera dado la misma moneda agregada á la averiguación, no habria constancia de la que pudiera deducirse que obró con dolo. Por el contrario, el acto de ser ella misma la que dió parte á un agente de policía, parece indicar que tenia la creencia de que la moneda con que habia hecho pago era legítima. Por estas razones el Promotor fiscal funda-